

COLOMBIA: La guerrilla de las FARC cumplió su palabra de liberar unilateralmente y sin contraprestación al cabo de la Policía Pablo Emilio Moncayo y al soldado profesional Josué Daniel Calvo, como también entregar los restos mortales del mayor Julián Ernesto Guevara, muerto en cautiverio. Debieron pasar 13 meses desde el ofrecimiento de las FARC para que el presidente Álvaro Uribe autorizara la operación humanitaria para ir por los liberados, los que fueron entregados a la senadora Piedad Córdoba y al obispo de la diócesis de Magangué, monseñor Leonardo Gómez Serna. La operación humanitaria estuvo acompañada por el CICR y contó con el apoyo logístico de Brasil. Al reencontrarse con sus familiares el cabo Moncayo declaró ante los medios de prensa que no es conveniente negar la existencia del conflicto como tampoco la de las guerrillas, las cuales pese a haber sido golpeadas en los últimos tiempos continúan activas y fuertes en los campos de Colombia. También invitó al Gobierno y a la sociedad colombiana a promover el acuerdo humanitario, para que todos los prisioneros en manos de las FARC puedan volver a sus casas. Seguidamente, la senadora Piedad Córdoba inició una gira por algunos países de Europa para recabar el apoyo internacional para el acuerdo humanitario y el inicio de conversaciones de paz. En su periplo por España, Suiza, Francia, Bélgica e Inglaterra, la senadora Córdoba ha insistido en el carácter humanitario del canje de prisioneros, el cual se constituiría en la puerta de entrada a un proceso de solución negociada del conflicto. Por su lado el presidente Uribe declaró que un acuerdo humanitario sería posible, sobre la base de obtener las garantías de que los presos de las FARC que sean puestos en libertad no vuelvan a delinquir. Inmediatamente los distintos candidatos en la puja por la presidencia de la República, han reaccionado positivamente frente a la posibilidad de un acuerdo humanitario replicando las palabras del presidente. Éste enfoque expuesto por el presidente y apoyado por los candidatos a sucederle ha sido también compartido por la senadora Piedad Córdoba. *El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, Telesur – Tv, Radio del Sur, BBC, El Colombiano, El Nuevo Siglo, 20/03/10 – 16/04/10*

Mientras la gira de la senadora Piedad Córdoba tiene su curso, la Procuraduría General de la Nación anunció que ha abierto un proceso de investigación contra ella por presuntos delitos de traición a la patria y enaltecimiento de la guerrilla de las FARC. La senadora ha declarado que las acusaciones hacen parte de la hostilidad y persecución política a que ha estado enfrentada desde hace varios años por su trabajo abierto y decidido a favor de la paz y por su radical oposición al gobierno del presidente Álvaro Uribe. El Ministerio Público asegura que las acusaciones se fundamentan en informaciones halladas en el computador de Raúl Reyes, en las cuales se ha podido establecer un nexo estrecho entre la guerrilla de las FARC y la senadora. Por su lado el monseñor Leonardo Gómez Serna ha declarado que en Colombia es costumbre vincular a la guerrilla a quien busca la paz por la vía del diálogo y la negociación. El obispo destacó que hay quienes persisten en la guerra por lo rentable que les resulta, pero que la verdadera paz no saldrá de la victoria militar de una parte sobre la otra, sino de la búsqueda de soluciones a los problemas de inequidad, injusticia y marginalidad que viven la mayoría de los colombianos. Entretanto, portavoces de la plataforma humanitaria Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP), han declarado que pese a las hostilidades contra su movimiento, continuarán en la búsqueda del acuerdo humanitario y la paz a través del intercambio epistolar con las guerrillas y el trabajo por ganar el apoyo internacional para estas causas. *CMI – Tv, Telesur – Tv, El Tiempo, Caracol – Radio, RCN – Radio, BBC, 20/03/10 – 16/04/10*

Después que medios de prensa revelaran algunos documentos incautados por la Fiscalía General de la Nación, en el allanamiento practicado en las dependencias del DAS, a raíz de las múltiples denuncias de actuaciones ilegales de este organismo de inteligencia contra la Corte Suprema de Justicia, partidos políticos de oposición, sindicatos, ONG's, periodistas y organismos humanitarios internacionales; el embajador de EEUU en Colombia, William Brownfield, anunció la suspensión de las ayudas económicas al máximo organismo de inteligencia del Estado, DAS, lo

cual constituye un golpe muy duro para la imagen del Gobierno a nivel internacional, habida cuenta que entre los documentos incautados se puede establecer que el DAS diseñó toda una estrategia para atacar a los opositores al Gobierno, usando tácticas de desprestigio personal e institucional, promoviendo divisiones y enfrentamiento, llegando a amenazar de muerte y sembrando pruebas falsas en allanamientos y registros a los domicilios y sedes de personas y colectivos que han expresado oposición al Gobierno e incluso el cometimiento de actos terroristas para inculparlos falsamente. Al respecto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, coincidiendo con la Fiscalía General de la Nación, ha declarado que el DAS se ha convertido en toda una empresa criminal que debe ser desmontada. Desde diversos círculos políticos y de opinión se han levantado voces que reclaman que las investigaciones sean llevadas hasta establecer quién o quienes ordenaron esta estrategia, y piden que el presidente Uribe asuma la responsabilidad política que le corresponde, por cuanto es él quien dirige la política de seguridad del Estado. Frente a estos hechos el presidente Uribe ha declarado a los medios de comunicación que bajo juramento, él no ha conocido ni ordenado este tipo de actuaciones del DAS, y que tampoco ningún funcionario del palacio presidencial está involucrado, asimismo exoneró de toda responsabilidad al exministro de Defensa Juan Manuel Santos, actual candidato presidencial del partido de la U, formación política que agrupa al uribismo y a quien el presidente ha brindado todo su apoyo. *El Tiempo, El Espectador, RCN – Radio, Caracol – Radio, BBC, El Colombiano, El Nuevo Siglo, Voz, El Mundo – Medellín, 20/03/10 – 16/04/10*

A su paso por Colombia el Secretario de Estado Adjunto de los EEUU, Arturo Valenzuela, de gira por varios países de América Latina declaró, luego de reunirse con el presidente Álvaro Uribe y el Alto Mando Militar, que su país ve con preocupación la carrera armamentista en que están involucrados algunos países de la región, al tiempo que advirtió que EEUU no va a permitir que un país agrede a otro. Por su lado el presidente Uribe acusó al Gobierno de Venezuela de promover una carrera armamentista en América Latina, luego del encuentro en Caracas entre el primer Ministro de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente Hugo Chávez; encuentro que sirvió para fortalecer la alianza estratégica entre los dos países, mediante acuerdos económicos, energéticos, financieros y de defensa. El primer Ministro Putin firmó un convenio de venta de armas y material bélico destinado a la defensa de Venezuela. De otra parte, el ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva Luján, anunció que durante la pronta visita al país del Secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, se estudiará la compra de ocho helicópteros de combate Black Hawk y armamento, con miras a desarrollar el Plan de seguridad 2011 y 2014. No obstante, el ministro aseguró que Colombia no participa ni participará en ninguna carrera armamentista. Por su lado, el Secretario de Defensa, Robert Gates, dijo en Lima, que su país está promoviendo un marco mas amplio de cooperación regional entre EEUU, México, Perú y Colombia para enfrentar el narcotráfico y el terrorismo. La visita de altos funcionarios de EEUU por América Latina está siendo interpretada por analistas internacionales, como parte de la respuesta estadounidense frente a la creciente presencia de Rusia, Irán y China en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. *El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, 20/03/10 – 16/04/10*

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación ha podido establecer que en 1997 los paramilitares cometieron 17 masacres y más de 1.000 asesinatos selectivos en el Urabá antioqueño y chocoano, así como el desplazamiento de miles de campesinos, todos estos actos instigados u ordenados por ricos empresarios dedicados a la ganadería y a la palmicultura. La lista que posee la Fiscalía está encabezada por los hacendados Juan Guillermo González Moreno y Andrés Vargas Montoya, los cuales ya han sido capturados y puestos a la disposición de autoridades judiciales. Finalmente, la Corte Constitucional instó al Gobierno a no demorar más la firma de la Ley de Víctimas de Desaparición Forzada, que obliga al Estado a investigar y castigar a los responsables, como también a establecer la verdad y reparar a las víctimas. El Gobierno ha alegado que no tiene recursos para implementar esta Ley, como razón principal para no firmarla, la Corte señala que el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de la Constitución y los recursos ya están dentro del Presupuesto Nacional. *El Tiempo, Caracol, Radio, CMI – TV, El Nuevo Siglo, El País – Cali, 20/03/10 – 16/04/10*